

Reformas electorales y sus efectos en la elección de diputados federales en México (1997-2015). Avances de investigación.¹

Odette Cáceres Gutiérrez²

Sergio A. Bárcena Juárez³

1.- Introducción.

El voto es una fórmula institucional que permite tanto el control de los gobernantes así como la visibilización del ciudadano en el proceso político. Es por ello que las reglas que encuadran al procedimiento electivo, deben facilitar la participación estimulando la mayor simetría posible entre la conformación descriptiva de los cuerpos estatales y las preferencias de los gobernados.

En el presente estudio nos enfocaremos en la representatividad del Poder Legislativo federal mexicano con base en su conformación y en la participación ciudadana en los procesos comiciales. El periodo de análisis inicia con la reforma electoral de 1997 porque a partir de entonces se presentaron fenómenos interesantes como: modificaciones evidentes en las preferencias partidistas de los ciudadanos, una reconstrucción de su sistema electoral y la gestación de formatos congresionales sin precedentes.⁴

Los objetivos de esta investigación son: en primer lugar, conocer cuál ha sido la evolución de las reglas formales en torno a la elección de los diputados federales; en segunda, indagar la relación que guardan las reformas electorales con el sistema de partidos y la

¹ Este texto, como su título lo indica, es un avance de investigación. La versión completa de este trabajo se encuentra en proceso de publicación en el libro: Problemas de rendimiento institucional del Congreso en México, coordinado por David Cienfuegos Salgado, Armando Hernández Cruz, Emilio Suarez Licona y Fermín Edgardo Rivas Prats. No citar sin permiso de los autores.

² Licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey. Asesora del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral entre octubre de 2009 y diciembre de 2011. Asesora del Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral Dr. Sergio García Ramírez entre enero de 2012 y febrero de 2013. odt.k.c.res.gtz@gmail.com

³ Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Sus líneas de investigación se centran en el poder legislativo, estudios electorales y representación política en el sistema político mexicano contemporáneo. sergio.barcena@itesm.mx

⁴ Téngase en cuenta que en 1997, la distribución de curules del Poder Legislativo sufrió un cambio radical respecto a años anteriores. Nos referimos a la pérdida de la mayoría simple por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), justo después de haber aplicado las nuevas reglas electorales de la reforma de 1996, lo que constituyó un hecho sin precedentes considerando que dicho partido había controlado dicho Poder tanto en el ámbito federal como el local.

competitividad, Por último, identificar las variables de carácter estructural y político inscritas dentro de este entorno institucional han incidido sobre la asistencia de los ciudadanos a las urnas en los distritos electorales que conforman la geografía federal del país.

Con el propósito de revisar la producción de reformas electorales implementadas entre 1997 y 2015, así como de analizar su contribución al juego electoral en México, nos apoyaremos en la teoría motivacional del voto, misma que nos permitirá interpretar la relación entre reglas, sistemas y estructuras de comportamiento electoral.

Más adelante, describiremos el impacto de dichas reformas sobre elementos sistémicos de la política mexicana como el sistema electoral, la competitividad, la simetría entre votos y asientos congresionales, además de la evolución en la cantidad de partidos que conforman la Cámara de Diputados.

Finalmente, expondremos un modelo basado en microdatos cuyo propósito es identificar los elementos sociodemográficos que han incidido sobre la participación electoral en los últimos 15 años, buscando conectar dichos resultados con el marco sistémico e institucional descrito anteriormente.

2.- La teoría motivacional del voto.

El enfoque motivacional se centra en la relación entre las instituciones y el comportamiento electoral y su razonamiento medular propone que la participación de los individuos en los procesos electivos, deriva de un cálculo individual de costos y beneficios mediado por estructuras socioeconómicas, e inscrito dentro de un sistema de competencia entre partidos y candidatos, el cual viene encuadrado tanto por reglas como por un sistema de valores. (Norris, 2002; 2003).

El primer elemento sistémico considerado en la teoría -y que ha demostrado tener efectos sobre la votación- es el sistema electoral. Las reglas formales constituyen un referente fundamental para el juego democrático puesto que definen quiénes tienen el derecho a emitir un voto, siempre con vistas a legitimar los procesos electivos, por lo que el sistema regulatorio de todo régimen democrático debe defender principios jurídicos como la equidad en las condiciones de la competencia política, la universalidad y facilitación del voto, el derecho de los ciudadanos a ser votados, la autonomía de los organizadores y jueces electorales, y la máxima transparencia en el proceso electivo (Dahl, 1991).

Asimismo, la teoría motivacional propone que el voto conlleva costos no solo económicos, sino también relacionados con el tiempo y esfuerzos que los electores dedican al ejercicio de sus derechos políticos. Tales costos se definen por una constante demanda informacional, la capacidad de interpretar dicha información, así como el proceso de registrarse en una lista de votantes. (Norris, 2002; Gray y Caul, 2000; Matsusaka, 1995).

El modelo motivacional sugiere estimar un balance entre la decisión de votar y la percepción individual de determinar la composición de ciertos órganos de gobierno. Según Norris (2003), dicho equilibrio tiene mayor peso en comicios importantes (donde se definen cargos de mayor jerarquía decisional) y que se anuncian más competidos, pues los votantes se sienten mucho más incentivados a acudir a las casillas en elecciones relevantes y cerradas que en aquellas en las que el resultado parece tener una conclusión inevitable o cuyo desenlace no generará un impacto visible sobre la vida de los gobernados.⁵

En resumen, los factores que -según la teoría de la motivación- inciden sobre la participación ciudadana en momentos electorales pueden ser normativos, sistémicos o endógenos.

Por factores normativos se entiende cómo las disposiciones regulan la equidad en el proceso, la autonomía de los órganos que inciden en el proceso, la transparencia de los comicios y la facilitación y acceso al ejercicio de los derechos de votar y ser votado. Los factores sistémicos implican el nivel de competitividad entre los competidores, las opciones electorales y el tipo de sistema electoral. Finalmente, los factores endógenos consisten en repertorios materiales, informativos e interpretativos.

3.- Factores normativos. Las reformas electorales en México y la configuración de un contexto político participativo.

A continuación se plantea un análisis de las reformas electorales 1997 y 2015. Para decodificar la orientación de estas modificaciones jurídicas, las hemos dividido en función de los componentes teóricos que integran el elemento normativo de la participación. Dichas

⁵ Por supuesto que las motivaciones de cada individuo pueden estar influenciadas por muchos otros factores como la movilización de grupos particulares (como de simpatizantes, partidos, o candidatos); la confianza en el gobierno, el compromiso moral o ideológico con cierto partido, el deber cívico, etc. A pesar de que reconocemos el peso de tales factores, analizar su impacto sobre la participación, excedería la capacidad explicativa de este capítulo.

categorías contemplan los principios jurídicos de equidad en las condiciones de la competencia política, universalidad y facilitación del voto, derecho de los ciudadanos a ser votados, autonomía de organizadores y jueces electorales, y máxima transparencia en el proceso (Dahl, 1991).

Reforma electoral de 1996. Las elecciones de 1994 se caracterizaron por una alta intervención ciudadana en general y en especial en las elecciones de Diputados con un promedio del 75.99%⁶ del Padrón Electoral. No obstante de que los resultados se aceptaron como legales, la equidad de la contienda fue muy cuestionada. En una relación casi simbiótica, los procesos tanto políticos como normativos (desencadenados varios años atrás) habían culminado en un contexto que exigía adaptar las normas a las exigencias sociales y políticas. Mientras que en el ámbito político, la esfera de decisión sobre las reformas había dejado de ser unipartidista (reforma de 1977) para integrar una negociación con la oposición (reforma de 1994) (Becerra, et. al., 2000, p. 378); en el ámbito normativo las reglas fueron cediendo paulatinamente la entrada de minorías partidistas en el parlamento (Arellano 2012).

Los puntos medulares de esta reforma que resultan relevantes para nuestro estudio son los siguientes:

- a) Autonomía total de los órganos administrativos electorales⁷ (*Autonomía de organizadores y jueces electorales*)
- b) Incremento del mínimo porcentaje de votos que debe obtener un partido para poder participar en la asignación de los 200 escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados (a partir de entonces aumentaría del 1.5 al 2%)⁸ (*Equidad en las condiciones de la competencia*)
- c) Equidad en los recursos de los que pueden disponer los partidos políticos a través del tope de gastos de campaña, la distribución más equitativa del financiamiento público, restricción a las aportaciones privadas y mecanismos de control más estrictos⁹. (*Equidad en las contiendas de la competencia, y pro máxima transparencia en el proceso*)

⁶ En 1994 la participación en las elecciones federales de diputados por el principio de mayoría relativa fue del 75.85%; mientras que en la de Diputados por representación proporcional fue del 76.13%.

⁷ Artículos 41, fracción III, párr. 1; 60, párr. 2; 94, párr. 1, y 99; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de agosto de 1996; 70, párr. 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), DOF 22 de noviembre de 1996.

⁸ Arts. 54, fracción II de la CPEUM, DOF 22 de agosto de 1996.

⁹ Arts. 41, fracción II, inciso c) de la CPEUM, DOF 22 de agosto de 1996; 49; 49-A; 49-B; 82, párr. 1, inciso m); 182-A; 269, párr. 1, inciso f); 272; Transitorios Noveno y Décimo del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996

- d) Equidad en el acceso de los partidos a las transmisiones en la radio y la televisión, es decir que se reserva el 30% de dichas transmisiones se asignan de forma igualitaria entre todos los partidos, y el 70% restante se hace en proporción a la fuerza electoral de cada partido¹⁰ (*Equidad en las condiciones de la competencia*)
- e) Se restringe el número de Diputados asignados por ambos principios a un partido político a un máximo de 8% de curules por encima del porcentaje de la votación nacional emitida, salvo que dicho porcentaje sea superado debido a triunfos obtenidos por el partido en distritos uninominales¹¹ (*Equidad en las condiciones de competencia*)
- f) Se abre la posibilidad para los partidos políticos de contender como una coalición total o parcial en los procesos electorales de Diputados por cualquiera o ambos principios de mayoría relativa y representación proporcional¹² (así como en las elecciones del Presidente de la República, y de Senadores). Cabe enfatizar que los partidos coaligados pueden conservar su registro, si la votación de su coalición equivale a la suma del 2% de la votación de cada partido coaligado. (*Equidad en las condiciones de la competencia*)
- g) Se crea la figura de las Agrupaciones Políticas, con acceso a prerrogativas y financiamiento públicos, así como obligaciones legales, tales como registrarse ante el árbitro. Estas organizaciones pueden participar en el proceso electoral mediante convenios de participación con los partidos políticos, por lo que no son contendientes directos en el proceso electoral; sin embargo, sí pueden representar una fuerza política¹³. (*Derecho de los ciudadanos a ser votados*)

¹⁰ Arts. 41, fracción II, inciso a) de la CPEUM, DOF 22 de agosto de 1996; 43, pár. 1; 47, pár. 3 del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996.

¹¹ Arts. 54, fracción V de la CPEUM, DOF 22 de agosto de 1996; 12, pár. 3 del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996.

¹² Arts. 58, párs. 1, 8, 9 y 10; 59, pár. 1, inciso d); 60; 62; 63; 66, pár. 1, inciso c); 178, párs. 4 y 5; 206; 229, y 230, pár. 1, inciso a) del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996; 12, pár. 1, inciso c) y pár. 4, y de la LGSMIME, DOF 22 de noviembre de 1996.

¹³ Arts. 41, fracción III, último párrafo de la CPEUM, DOF 22 de agosto de 1996; arts. 1, pár. 2, inciso b); 5, pár. 1; 33; 34; 35; 39, pár. 2; 49, pár. 6; 49-A, pár. 1; 49-B; 82, pár. 1; incisos g), h) i) y k); 93, pár. 1, incisos c), d), f) e i) del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996; 189, frac. II, y 191, frac. XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), DOF 22 de noviembre de 1996; 5; 13, frac. III, inciso c); 21; 45, pár. 1, inciso a) y frac. III de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), DOF 22 de noviembre de 1996.

- h) Se posibilitó el ejercicio del derecho del voto en sectores o distritos electorales distintos a los que corresponde cada ciudadano a fin de que fuera factible la emisión del voto por mexicanos residentes en el extranjero¹⁴ (*Universalidad y facilitación del voto*)
- i) Vigilancia del financiamiento de los observadores electorales¹⁵ (*Máxima transparencia en el proceso*)

Reforma electoral de 2007-2008: A raíz de la reforma de 1996 el orden político en la historia nacional, el partido hegemónico perdió la mayoría absoluta en el parlamento y el país cambió. La elección presidencial de 2006 se rigió por una aguda confrontación entre las principales fuerzas políticas del país y como resultado, el ganador de la Presidencia obtuvo una ventaja de menos de 24,000 votos¹⁶. Esta situación forzó al gobierno entrante a fortalecer las instituciones políticas del país. Así, una nueva reforma tuvo lugar, la cual reforzaba algunos de los puntos abordados en 1996:

- i) Se restringe la regulación de las Agrupaciones Políticas Nacionales: se les retira el financiamiento público, sin exentarlas de sus obligaciones de fiscalización, y se prevén causales de pérdida de registro¹⁷. (*Derechos de los ciudadanos a ser votados; máxima transparencia en el proceso*)
- ii) Se permite que las organizaciones de ciudadanos y las agrupaciones políticas nacionales puedan convertirse en partidos políticos, y éstas últimas puedan contender en el proceso electoral ya no solo por acuerdo de participación con partidos políticos, sino también con coaliciones¹⁸. (*Derecho de los ciudadanos a ser votados*)
- iii) Se amplía el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión, a su uso permanente, a través de los tiempos del Estado que la Constitución Política le reconoce, aunque con reglas más específicas¹⁹. (*Equidad en las condiciones de la competencia.*)

¹⁴ Arts. 208, pár. 2; 223, pár. 2, incisos a), b) y c); Octavo Transitorio, pár. 3 del COFIPE, DOF, 22 de noviembre de 1996.

¹⁵ Art. 5, pár. 4 del COFIPE, DOF 22 de noviembre de 1996.

¹⁶ Cifras de los resultados del cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtenidas del Atlas de Resultados Electorales Federales de 1991-2012, disponible en www.ine.mx. Consulta: el 25 de junio de 2016.

¹⁷ Arts. 34, pár. 4; 35, párs. 1, 2, 4, 7, 8 y 9 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

¹⁸ Arts. 41, Base I, pár. 2 de la CPEUM, DOF 13 de noviembre de 2007; 22, pár. 1; 24; 34, pár. 1 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

¹⁹ Arts. 41, Base III, apartado A del CEPUM, DOF 13 de noviembre de 2007; 49 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

iv) Se imponen a los partidos obligaciones de transparencia, y se reconocen los respectivos derechos ciudadanos a conocer información de los partidos²⁰. (*Máxima transparencia en el proceso*)

v) Se limitan las coaliciones de los partidos políticos en las contiendas electorales de Diputados y Senadores únicamente al principio de mayoría relativa y ya no por el de representación proporcional. A diferencia de procesos anteriores, ahora los votos obtenidos por la coalición contarán para cada uno de los partidos que la integran y en general se facilitan las posibilidades de que los partidos coaligados conserven su registro²¹ (*Equidad en las condiciones de competencia*)

vi) Se suprime la disposición que establecía que, para los casos en que un partido hubiera perdido su registro, debía de esperar a que hubiera transcurrido un proceso electoral federal ordinario para poder volver a solicitar su registro.²² (*Equidad en las condiciones de la competencia política; y derecho de los ciudadanos a ser votados*)

vii) Se endurecen algunos requisitos como la obligación de identificarse plenamente al solicitar la credencial para votar, así como los plazos para recogerla, y el plazo de vigencia de la misma. De esto último derivó una exigencia a una gran parte de los ciudadanos de renovar sus credenciales²³. (*Universalidad y facilitación del voto*)

viii) Se prevén supuestos que obligan a la autoridad a garantizar la instalación de las casillas para votar en lugares que sean más accesibles a los ciudadanos (antes sólo se hablaba de “procurar”)²⁴ (*Universalidad y facilitación del voto*).

ix) Se posibilita para algunos casos que los ciudadanos puedan votar sin estar en las Listas Nominales o contar con credencial para votar (siempre y cuando expongan la resolución del Tribunal Electoral que así lo reconozca), e incluso a los ciudadanos cuyas credenciales tengan errores de seccionamiento²⁵ (*Universalidad y facilitación del voto*)

Reforma electoral de 2014: Se modifican algunos de los artículos constitucionales más importantes en materia electoral, y la regulación electoral es atomizada: se abroga el COFIPE, y en su lugar se crean la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de

²⁰ Arts. 41, 42 y 43 del COFIPE, DOF, 14 de enero de 2008.

²¹ Arts. 95, 96, párr. 5 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

²² Art. 32 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

²³ Art. 180, párrs. 2, 4, 5; 199, párrs. 1 al 5; 200, párr. 4 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

²⁴ Art. 239, párrs. 3, inciso b), 4 y 6 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

²⁵ Art. 264, párrs. 1 y 2 del COFIPE, DOF 14 de enero de 2008.

Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, además de realizarse la adecuaciones correspondientes adecuaciones en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cabe mencionar que, a pesar de la gran movilidad normativa para efectos de nuestro estudio, los puntos relevantes no fueron muchos y tampoco tan sustanciosos como en las reformas anteriores. Sin embargo, de los temas medulares de la reforma, corresponden a nuestro modelo teórico los siguientes puntos:

- i) Se aumenta el porcentaje de votos válidos en cualquiera de las elecciones de Presidente, de Diputados o de Senadores, que deberá obtener un partido para poder conservar su registro del 2 al 3%²⁶. (*Equidad en las contiendas de la competencia*)
- ii) Del mismo modo, para que un partido tenga derecho a la asignación de escaños en la Cámara de Diputados por principio de representación proporcional, se establece como requisito la obtención del 3% (en lugar del 2%) de la votación válida de las listas regionales de las circunscripciones plurinominales.²⁷ (*Equidad en las contiendas de la competencia*)
- iii) Se modifica la definición de la coalición parcial especificando que en su caso, los partidos políticos la usarán para postular al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proceso electoral, bajo una misma plataforma; y se crea la figura de la coalición flexible restringiendo a las candidaturas que se postularán en esta modalidad a un 25%²⁸. Cabe mencionar que en esta reforma se sigue exigiendo a cada partido coaligado que obtenga el mínimo de votos válidos (del 3%) para poder conservar el registro²⁹ (*Equidad en las contiendas de la competencia*)
- iv) Se establecen las candidaturas independientes como un mecanismo para que los ciudadanos puedan postularse a un cargo de Diputado o de Senador habiendo cumplido ciertos requisitos. En su caso, se les asignarán financiamiento y espacios en radio y

²⁶ Art. 41, Base I de la CPEUM, DOF 10 de febrero de 2014; 94, pár. 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), DOF 23 de mayo de 2014.

²⁷ Arts. 54, frac. III de la CPEUM, DOF 10 de febrero de 2014; 9, pár. 1, inciso c), frac. I de la LGPP, DOF 23 de mayo de 2014.

²⁸ Art. Segundo Transitorio, frac. I, inciso f) de la CPEUM, DOF 10 de febrero de 2014; 88 y 91, pár. 3 de la LGPP, DOF 23 de mayo de 2014.

²⁹ Art. 94, pár. 1, inciso c) de la LGPP, DOF 23 de mayo de 2014.

televisión, así como tendrán obligaciones de fiscalización³⁰. (*Derecho de los ciudadanos a ser votados; Equidad en las condiciones de la competencia*)

v) Se amplía y garantiza el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, facilitando el trámite de registro desde el extranjero, así como el proceso mismo de la emisión del voto (entre otros mecanismos, se abre la posibilidad al voto por vía electrónica). Esto será posible para las elecciones de Senadores por principio de mayoría relativa (entre otras) pero no para las elecciones de Diputados³¹. (*Universalidad y facilitación del voto*)

vi) Se aumentan las obligaciones de transparencia de información de los partidos, permitiendo su libre y directo acceso para cualquier interesado (padrón de afiliados, contrataciones, etc.)³² (*Máxima transparencia en el proceso*)

Ahora bien, lo primero que se advierte del análisis anterior, es que las reformas electorales en los últimos años han tenido más énfasis en la preocupación por generar cierto balance en la competencia entre partidos, que lo que lo han hecho en el empoderamiento de los ciudadanos sobre la definición de la composición de la Cámara de Diputados. Para efectos de lo anterior, sirve notar que en las reformas de 1996 y 2014 la equidad en las contiendas fue el tema prioritario, habiendo más reformas en ese tema que en los otros, y en la reforma de 2007-2008 si bien no fue la prioridad tampoco lo fue el empoderamiento de los ciudadanos.

4.- Factores sistémicos. Sistema electoral, competitividad y los partidos en México.

Desde 1977, el sistema electoral mexicano ha mantenido una estructura mixta.³³ En un inicio éste se diseñó bajo el principio de lista adicional para consolidar la presencia de

³⁰ Arts. 41, Base III, primer párrafo; Apartado A, incisos e) y g), y Apartado B, inciso c); 116, frac. IV, inciso k); y Transitorio Segundo, frac. I, inciso g), numeral 3, de la CPEUM, DOF 10 de febrero de 2014; 423; 424; 426; 427; 428; 429; 432; 433; 436; 437; 438; 442, pár. 1, inciso c); 436; 456, inciso d); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), DOF, 23 de mayo de 2014; 13, pár. 1, inciso d) de la LGSMIEM, DOF 23 de mayo de 2014.

³¹ Art. Transitorio Décimo Tercero de la LGIPE, DOF 23 de mayo de 2014.

³² Arts. 17; párs. 2 y 3, inciso g); 25, inciso t); 27; 28; 43, pár. 1, inciso f) de la LGPP, DOF 23 de mayo de 2014.

³³ Estas reglas tienen su origen en una reforma constitucional aprobada el 6 de diciembre de 1977, por el presidente José López Portillo. Con el objeto de devolverle la salud al sistema democrático autoritarismo, se puso en marcha una reforma al Art. 70 constitucional sustituyendo a los diputados de partido por un sistema mixto con predominante mayoritario. La representación vía proporcionalidad de votación nacional buscaba integrar con mayor solidez a la oposición política. Así, la esencia de la reforma fue hacer presentes las

partidos minoritarios opositores.³⁴ Actualmente mantiene su naturaleza compuesta, conformando cada 3 años una asamblea de 300 legisladores asignados por voto directo en distritos uninominales (segmento mayoritario) y 200 a través de porcentajes por partido en 5 circunscripciones plurinominales de 40 miembros definidos por listas cerradas y bloqueadas (segmento proporcional), con un umbral mínimo de permanencia partidista que ha variado entre el 1.5 y el 3%.

Ya que la esencia mixta de las reglas de votación se ha mantenido a lo largo del periodo aquí contemplado, el sistema electoral no puede emplearse como variable explicativa de la participación.³⁵ Sin embargo, la información disponible sí permite estudiar la correspondencia entre el voto y la configuración partidista de la cámara, lo cual constituye un tema de vital interés para evaluar el desempeño de un sistema de partidos (Sartori, 1997).

De acuerdo con Valdés (2013: 19), los sistemas mixtos “intentan rescatar lo mejor de los sistemas de mayoría y de representación proporcional. En ellos se conserva la relación representante-representado, propia de la elección uninominal, a la vez que se evitan los efectos de sobre y subrepresentación, que se supone son inherentes a los sistemas de mayoría”. En este sentido, se esperaría que el sistema mixto mexicano contribuyera a modular los efectos de posibles disparidades entre el porcentaje de votos obtenidos y los asientos ocupados por los distintos partidos.

Los datos confirman que si la cámara se hubiera elegido sólo por método mayoritario entre 1997 y 2015, el PAN y el PRD se habrían visto subrepresentados en promedios de 1.8% y 1.27% respectivamente, mientras que el PRI hubiese tenido una sobrerrepresentación

opiniones de las minorías en las decisiones mayoritarias. La norma secundaria derivada de este cambio constitucional fue la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).

³⁴ El diseño original de este sistema en la CPEUM y en la LFOPPE, planteaba que los 100 asientos de representación proporcional se repartieran únicamente por método de cociente entre partidos minoritarios que hubieran tenido un mínimo de votación del 1.5%, mientras que las otras 300 curules se definían en elecciones distritales uninominales. Actualmente todos los partidos participan en la repartición de curules por principio plurinominal independientemente de la cantidad de diputados de mayoría relativa que ganen en sus distritos. Asimismo existen dos límites a la sobrerrepresentación. El primero, es que ningún partido por sí mismo puede ocupar más del 60% de las curules en la asamblea y el otro es que el porcentaje de asientos totales de un partido no puede ser 8% mayor que la votación nacional que haya obtenido. Véase el párrafo V del Art. 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionado en 1993 y reformado en 1996.

³⁵ Asimismo, el voto dual (los votos para diputados de mayoría, se traslada automáticamente a la circunscripción plurinominal que alberga el distrito uninominal donde se emite cada voto) impide que establezcamos diferencias en el impacto participativo entre los dos segmentos del sistema.

media del 14.18%. Empero, cuando estos resultados se contrastan con la conformación absoluta de la asamblea (considerando la asignación por ambos principios electivos), los efectos de sesgo favorable al PRI se atenúan. En términos reales tanto el PRI como el PAN tuvieron una ligera sobrerrepresentación del 4.3% y el 2.3%, y el PRD siguió quedando subrepresentado en la asamblea con respecto de su votación nacional en un 0.74%.

Recordemos que las recientes reformas diseñadas para modificar la integración de la cámara, han apuntado hacia la compactación del sistema de partidos mediante el aumento en los requisitos (umbrales) de permanencia y el endurecimiento de las reglas de coalición.³⁶ Como señalan Aparicio y Márquez (2010:88), “un umbral mínimo de votos para conseguir representación produce tanto un efecto psicológico -desincentivar el voto por partidos pequeños-, así como uno mecánico -disminuir el número efectivo de partidos en la cámara”.

Sin embargo, el efecto de las reformas no ha sido el que teóricamente se esperaría. Considerando el número efectivo de partidos³⁷ ha habido un aumento en la cantidad de jugadores con poder de veto en la asamblea pasando de 1.7 después de la reforma de 1977 a prácticamente 4 partidos efectivos, incluso tras las modificaciones de 2014, cuando el umbral mínimo de los partidos para tener derecho a la representación parlamentaria federal, aumentó al 3%.

Mediante simulaciones estadísticas a partir de los resultados de 2006 y 2009, Aparicio y Márquez (2010) previeron que un alza en los umbrales de representación reduciría el número efectivo de partidos en la Cámara de Diputados mexicana.³⁸ No obstante, sus cálculos estiman mínimos de 5% y 7%, por lo que podemos concluir que a pesar de que el rediseño institucional ha aumentado los requisitos electorales de acceso y permanencia para los partidos, estos incrementos han sido marginales -o al menos no han llegado al punto crítico donde puedan reducir la cantidad de partidos efectivos en la asamblea.

³⁶ Entiéndase por umbral, el porcentaje mínimo que solicitan las reglas electorales para que un partido mantenga su registro como grupo político a nivel federal y para que tenga derecho a participar en la asignación e asientos legislativos en la cámara.

³⁷ El número efectivo de partidos (NEP), se calculó mediante la siguiente fórmula, retomada de Laakso y Taagepera(1979): $1/\sum_{i=1}^n S_i^2$

³⁸ Además de aumentar la cantidad de asientos disponibles para el PRI debido a los efectos selectivos que producen los topes de sobrerrepresentación.

Una interpretación de los datos arriba descritos sugiere que inclusive los partidos que acusan parcelas relativamente reducidas de apoyo ciudadano, han demostrado ser organizaciones políticas que representan intereses de cuantía considerable. Lo cual puede asumirse como un estímulo para que los ciudadanos voten al encontrarse un abanico de posturas partidistas entre las cuales puedan ubicar sus preferencias.³⁹

La competitividad es un síntoma legitimatorio de los sistemas democráticos, en tanto que hace patente la posibilidad de elegir y modificar gobiernos (Nohlen, 1994) a la vez que refleja “la organización de las fuerzas políticas al disputarse el poder político en una contienda electoral, basadas en un equilibrio de oportunidades, instituciones y reglas justas que promuevan y sostengan la incertidumbre del resultado anterior al final de la competencia” (Sánchez, 2006: 64).

La pauta institucional de producir una competencia más equitativa entre partidos mediante mecanismos ecualizadores de financiamiento de campaña y acceso a medios en las recientes reformas, ha sido fructífero si se estiman las diferencias entre primer y segundo lugar para la elección de diputados en los 300 distritos uninominales.⁴⁰ Asimismo, al erosionarse el voto duro por un partido hegemónico y aparecer nuevas y más numerosas opciones electorales, los niveles de competitividad se han visto enriquecidos. Hemos considerado datos desde 1991 para evidenciar el salto positivo de competitividad entre 1994 y el actual periodo. A partir de esa última elección, la competitividad a nivel federal ha aumentado paulatinamente, aunque parece haber llegado a un estado de normalización, de tal modo que entre 1997 y 2015 los niveles de competitividad ya no han tenido una evolución tan drástica.

5.- Factores endógenos. Los repertorios ciudadanos de participación política.

Si bien las posturas ciudadanas hacia el sistema político devienen de percepciones e intereses individuales, éstos últimos son producto de un desarrollo biográfico contenido en

³⁹ Aunque como hemos adelantado, la existencia de más partidos en el sistema no necesariamente significa que los ciudadanos sean más participativos en los procesos electorales, pues puede haber sistemas que contengan partidos con ideologías muy similares entre sí o que aglutinen en sus estructuras a grandes conglomerados ciudadanos.

⁴⁰ Para estimar la competitividad, se calculó el inverso de las diferencias porcentuales entre el primer y el segundo lugar en cada distrito de mayoría relativa mediante la fórmula: $1 - (\%1er\ lugar - \%2lugar)$, donde el porcentaje se estimó con respecto de los votos totales por distrito (incluyendo votos nulos y por candidatos no registrados).

contextos socioeconómicos y geográficos de referencia. En este sentido, la perspectiva estructural del voto propone que la pertenencia a colectivos, las distinciones marcadas por segmentos etarios, de género, religión, etc., así como la adquisición de conocimientos recursivos en el transcurso de vida de un individuo, son determinantes para conocer la inclinación de las personas a participar en ejercicios institucionales de expresión pública (Verba, et. al., 1995; Saéz, 1998). Asimismo, se ha comprobado que el desarrollo de propósitos actitudinales como confianza, referencia, identidad y conocimientos relacionados con el ámbito político, se construyen mediante grupos de referencia geográficamente contenidos (Lizama, 2012).

Para nuestro estudio, empleamos los distritos electorales como perímetros geográficos y sociodemográficos en la medición de la participación electoral a lo largo del territorio nacional entre 2006 y 2015.⁴¹ Es cierto que los resultados pueden dar lugar a falacias ecológicas, dada la heterogeneidad en grupos de más de 300 mil individuos, sobre todo cuando se consideran indicadores con fuertes disparidades intrarregionales como los niveles de escolaridad o el acceso a servicios. Sin embargo, el presente estudio no pretende puntualizar el análisis geográfico mediante parcelas homogéneas de votantes, sino identificar tendencias longitudinales en torno a la participación.

Con base en las aproximaciones teóricas anteriormente comentadas, pusimos a prueba un modelo estadístico de regresión logística binaria que busca descifrar el peso de ciertas variables sociodemográficas, contenidas en agregados distritales sobre la propensión de una unidad geográfica (distrito) a colocarse en el tercil más alto de participación en el proceso electoral analizado.⁴²

El modelo en comento busca medir la propensión de riesgo de los distritos electorales que tuvieron elecciones para diputados federales de mayoría relativa entre 2006 y 2015

⁴¹ Los distritos electorales federales son porciones territoriales contenidas dentro de las entidades federativas. El Art. 53 constitucional señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría. Véase la reglamentación secundaria a este mandato constitucional en el art. 214 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

⁴² Si bien la naturaleza del indicador que usaremos como variable independiente del modelo es de carácter individual (voto), su medición se hará en agregados de colectividades definidas por la geografía política. Con ello buscamos integrar las dimensiones estructurales en la intencionalidad participativa de los individuos analizados.

(Legislaturas LX-LXIII), de haberse ubicado en el tercil superior de participación a nivel nacional en cada elección. Así, la variable dependiente se codificó como un valor *dummy* llamado *par_ter* pudiendo adquirir los valores: 1=el distrito pertenece al tercil más alto de participación a nivel nacional en esa elección particular; 0=no pertenece a dicho tercil.⁴³

Las variables independientes del modelo (predictores) fueron seleccionadas en función de los preceptos teóricos retomados para esta investigación. Como predictores de *par_ter*, seleccionamos los niveles distritales de competitividad, porcentaje de personas con educación posbásica, porcentaje de mujeres, de jóvenes (18 a 24 años), de ancianos (de 60 años y más) y de indígenas; Porcentaje de hogares con piso de tierra, población económicamente activa y viviendas habitadas con acceso a internet, radio y tv.⁴⁴

Tras realizar pruebas para cada predictor, nos percatamos de que todos ellos describían distribuciones que rompían los criterios de normalidad. Por tanto decidimos segmentarlas (al igual que la variable dependiente) con 2 puntos naturales de corte (*jenks*). Posteriormente convertimos las variables en *dummies* distinguiéndolas por la pertenencia o no del distrito al tercil más alto de incidencia (ej. el porcentaje de mujeres en el distrito permite ubicarlo en el tercil superior a nivel nacional en términos de población femenina: 1=sí; 0=no).⁴⁵

Las violaciones de normalidad detectadas en la distribución de la variable dependiente (*par_ter*), nos llevaron a realizar un modelo de regresión binaria logística. Cabe aclarar que para aumentar la capacidad interpretativa del mismo, debimos correr una regresión independiente para cada tipo de elección, pues como se pudo observar en la gráfica 3, la

⁴³ Seleccionamos únicamente los años 2006-2015 debido a que los datos disponibles a nivel censal sólo se han registrado a partir de 2010.

⁴⁴ Estos datos por agregado distrital fueron recuperados de las estadísticas censales a escalas geoelectorales del INEGI-INE, disponible en: <http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html>. El ejercicio censal del cual surgieron datos de INEGI-INE correspondió a 2010, por lo que esa misma información fue empleada para estudiar la participación en las elecciones de 2006 y 2009. Para las dos legislaturas restantes (electas en 2012 y 2015) la información se obtuvo de la página México en Cifras del INEGI, disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=32> con datos (en algunos casos) del ejercicio censal de 2014. Dado que la información de México en Cifras viene mostrada por entidades y municipios, debimos hacer un agregado de datos para generar información por distritos. Para ello anidamos los municipios en distritos recurriendo al plano condensado estatal seccional del INE por cada entidad, disponible en: <http://www.ine.mx/archivos1/DERFE/cartografia/CES.html>

⁴⁵ La única excepción fue el índice de competitividad por distrito cuya distribución (con menores niveles de sesgo y curtosis) pudo ser normalizada mediante una conversión cuadrática, quedando como una variable escalar de tipo continuo.

variable explicada es un fenómeno bimodal, afectado por el tipo de elección (concurrente o intermedia).

-----INSERTAR TABLA 1-----

Del anterior modelo amerita destacar que en regiones con una alta densidad de hogares cuyos habitantes poseyeron dispositivos de comunicación como radio y computadora personal, los momios de que el distrito se ubicara en el tercil superior de participación, se incrementaron considerablemente. En el caso de la tenencia de radio en el hogar, estos se multiplican por 3.73, mientras que la posesión de una computadora en casa, produjo un incremento del 143% respecto de distritos con menores proporciones en la posesión de este benefactor.

La educación generó también una incidencia positiva sobre la propensión de las secciones a ser altamente participativas. Manteniendo el resto de los predictores constantes, cuando un distrito contuvo un alto porcentaje de pobladores con educación posbásica, sus momios de ser participativo (en comparación con los distritos que reportaron porcentajes menores de individuos con ese nivel de preparación académica), aumentaron en un 172%.

Este último resultado parece contravenir la predicción de Salazar y Temkin (2007) sobre una relación negativa entre escolaridad y voto. Si bien los autores consideraron que la pérdida de confianza en las instituciones y una actitud más crítica de los sectores educados hacia las elecciones, reduciría el interés de este sector por participar, nuestro resultado sugiere que la educación posbásica ha sido un facilitador de la participación a manera de recurso interpretativo o de apoyo a los procesos electorales como forma de ejercer la ciudadanía.

Es interesante notar cómo los distritos con mayores carencias en servicios y con un evidente componente indígena también reportaron amplias probabilidades de ser participativos. Sosteniendo los demás predictores constantes, cuando un distrito se ubicó en el tercil superior de hogares con piso de tierra en el país, sus momios de ocupar el más alto nivel de participación a nivel nacional, comparados con los distritos sin esta característica, fueron superiores en razón de 2.64, mientras que la pertenencia de los distritos al lugar más alto en términos de población indígena, multiplicó sus momios de ser participativos por 2.38 comparado con distritos con menor población indígena.

Esta interacción cóncava de posesión de recursos que parece afectar positivamente tanto al extremo poblacional con pleno acceso a servicios y bienes como a la capa con mayores restricciones materiales por distrito, sugiere que la posesión de recursos (en este caso, comunicativos y de interconexión) pueden materializar las intenciones de voto en participación efectiva. Asimismo, se tiene que la posesión de repertorios interpretativos comúnmente socializados en el entorno educativo formal, inciden positivamente en la participación por distrito.

Del otro lado de la escala socioeconómica, existe la idea de que la lucha electoral constituye la única arena donde se pueden superar las distinciones étnicas, de clase e ingreso, por lo que aquellos segmentos menos aventajados salen a las urnas cada que el sistema les permite expresar sus reivindicaciones (Meltzer y Richards, 1981). Tampoco podemos rechazar la hipótesis de una movilización exógena asumiendo que el establecimiento de redes clientelares aumenta la participación electoral por un esfuerzo de los partidos para establecer intercambios materiales con los votantes de distritos marginados (Schaffer y Schedler, 2007).

Finalmente, en nuestro modelo de elecciones concurrentes, la competitividad tuvo un efecto de significancia estadística débil sobre la ubicación de los distritos en el tercil prominente de participación a nivel nacional. Dicho resultado es congruente con estudios aplicados tanto al contexto internacional como al caso mexicano (Dettrey y Schwindt-Bayer, 2009; Gómez Tagle 2009; Morales et. al., 2011). Nuestra hipótesis para explicar la exigua interrelación entre competitividad y participación es que en años recientes se ha dado una redistribución en el apoyo electoral hacia los distintos partidos en el sistema. No obstante, ello no ha significado una ampliación de la base electoral. Los rediseños institucionales parecen no haber sido lo suficientemente eficaces como para transformar la realineación de las preferencias electorales en un interés de más ciudadanos por expresarse políticamente mediante el voto. Por otra parte, los institutos partidistas no han podido superar el creciente descrédito que la colectividad ha mostrado hacia sus métodos de campaña y su escasa capacidad para mantener una simetría entre sus plataformas electorales y los programas gubernamentales que implementan.

-----INSERTAR TABLA 2 AQUÍ-----

En distritos donde hubo un alto porcentaje de población juvenil y de adultos mayores, se reportó mayor proclividad a la participación. Las concentraciones de juventud y senectud por encima del tercil mayor del país, multiplicaron los momios de ocurrencia del evento (fuerte participación distrital) en razones de 2.02 y 2.47 respectivamente.⁴⁶ La primera interpretación del modelo de elecciones intermedias, es que –manteniendo el resto de los predictores constantes- a diferencia de las elecciones concurrentes, las características etarias de los distritos sí incidieron sobre los niveles de participación electoral.

Uno de los principales argumentos de la literatura especializada, es que los jóvenes reportan una menor participación que cohortes de edad mayores debido a que los primeros transitan por una etapa en la que apenas comienzan a conocer los efectos de las decisiones políticas sobre sus vidas, mostrándose poco interesados en los resultados electorales. Esta hipótesis asume que conforme la gente madura, adquiere recursos y experiencias que estimulan su participación electoral. Asimismo, se piensa que dada su corta edad, los jóvenes no han generado vínculos ideológicos o militancia con alguna fuerza partidista reduciendo su compromiso con opciones políticas determinadas (Rosenstone y Hansen, 1993).

Las nociones expuestas en el párrafo previo explicarían por qué en distritos con mayor porcentaje de adultos mayores a nivel nacional, creció la voluntad participativa. No obstante, el hecho de que los distritos con mayor densidad de población juvenil reporten momios positivos de participación, pone en duda la idea de que éste sea un grupo electoralmente apático. También cuestiona la noción de que el voto en este tipo de procesos venga estimulado sobre todo por el compromiso con algún partido, un sentimiento de deber o por la experiencia recursiva adquirida a lo largo de los años, lo que abre la posibilidad de entender el voto desde su función expresiva como premio o castigo a los gobiernos en funciones.

Por último, nuestro modelo arroja que aquellos distritos que concentraron mayores porcentajes de población femenina en el país, vieron reducidos en un 60%. sus momios de aparecer entre los más participativos. Lo mismo ocurrió en el caso de la PEA, pues donde hubo mayores índices de personas económicamente activas, los momios comparativos de alta

⁴⁶ El resultado obligó a hacer una pregunta emergente: ¿Qué relación guarda una alta presencia de ciudadanos colocados entre ambos extremos de la pirámide etaria (24-59 años) y la propensión del distrito a ser participativo? El resultado que arrojaron las pruebas, fue una débil correlación entre estos factores, lo que permite superar un error de variable omitida al interpretar el modelo. Rho de Separman de .109 con un nivel de significancia estadística de .387.

participación se redujeron en casi 70%. En primera instancia lo anterior sugiere que el segmento femenino de la población ha estado poco interesado en expresarse electoralmente en procesos intermedios. De igual manera, si las elecciones intermedias se observan como una expresión de confianza o desacuerdo con los gobiernos, quienes son económicamente activos han hallado pocas razones para expresar su apoyo al sistema mediante el voto.

Conclusiones

En este estudio sobre la conformación de la Cámara de Diputados y la participación ciudadana en los procesos electorales sometimos a prueba la teoría motivacional del voto segmentando nuestro modelo en tres niveles analíticos.

A nivel normativo, se comprobó que las recientes reformas electorales (desde 1996), buscaron redefinir el sistema democrático dando prioridad a la construcción de condiciones equitativas de competencia entre los partidos políticos. Tales reformas han impactado el nivel sistémico de la política electoral en México. Entre los más notorios efectos de este rediseño se advierte el aumento en los niveles de competitividad interpartidista. Los datos demostraron que la cercanía entre primer y segundo lugar para la elección de diputados federales, se ha acortado desde 1991, llegando a un punto de relativa estabilidad a partir de 1997, año en que por primera vez el PRI, no obtuvo una mayoría en la asamblea federal.

Un síntoma positivo del actual sistema electoral es que ha modulado las asimetrías entre votos y asientos asignados por partido. Los índices de desproporcionalidad terminan siendo relativamente bajos cuando se considera la elección de diputados por ambos principios (MR y RP), gracias a los topes de sobrerrepresentación y a la asignación porcentual de curules.

Otro elemento sistémico que se vio impactado por las reformas, fue la interacción partidista en términos de presencia congresional. A pesar de que las reformas han buscado reducir la cantidad de partidos efectivos en la Cámara, ésta ha aumentado ya sea porque el alza en los umbrales de supervivencia no ha sido lo suficientemente drástica o porque algunos de los partidos de menor tamaño han implementado estrategias de coalición y campaña y que les han permitido mantener su registro en el sistema.

La participación, sin embargo, no se ha visto particularmente estimulada por los cambios al marco institucional. No obstante, es difícil establecer si las reformas han jugado un papel fundamental en la tendencia reductiva de la base electoral en México o si esto se

debe a un creciente descrédito de los partidos, instituciones y jueces de la contienda entre la ciudadanía. En este punto se evidencia una clara y sistemática disparidad entre procesos intermedios y concurrentes, siendo que en el caso de los primeros, la apatía ciudadana es más notoria.

El hecho de que la competitividad mostrara una línea temporal ascendente y que la participación ciudadana no describiera signos de recuperación en el periodo analizado, nos permitió hipotetizar que las reformas al entramado institucional (más centradas en satisfacer las demandas de equidad de los partidos que en estimular mecanismos de participación ciudadana), han tenido una importante influencia sobre el sistema de partidos aunque no han contribuido a intensificar el interés ciudadano de formar parte de la vida democrático expresando su voto en las urnas.

Por último, realizamos un análisis del voto a nivel distrital que permitió establecer relaciones entre factores normativos (nivel macro), los elementos sistémicos (nivel meso) y las determinantes individuales (nivel micro) del voto en México a partir de 2006. Tras concatenar los datos sociodemográficos a nivel distrital con indicadores participativos, descubrimos que los procesos concurrentes e intermedios tienen una lógica muy distinta entre sí. Mientras la participación ciudadana en los primeros se explica por el acceso a portales comunicativos, características étnicas, y el nivel educativo de los ciudadanos, en el caso de los segundos, son factores etarios, económicos y de género los que activan o deprimen la actividad electoral por agregación distrital.

A partir de los modelos presentados, se fortaleció la hipótesis de que la posesión de repertorios interpretativos y el acceso a servicios, potencia la actividad electoral dado que permite al ciudadano, reducir los costos de adquirir y procesar información electoral. Por otra parte, se planteó la posibilidad de que sectores con menores ventajas económicas pudieran emplear su voto como expresión reivindicatoria de demandas de clase o etnia, o bien que dada su vulnerabilidad, estos segmentos poblacionales fueran movilizados por las élites políticas mediante prácticas clientelares.

En el caso de las elecciones intermedias comprobamos que los dos extremos de la banda etaria en los distritos, contribuyeron a hacer de estas demarcaciones, espacios altamente participativos. Aunque la literatura ha comprobado y argumentado una mayor participación electoral de los adultos mayores, el resultado aquí obtenido en el caso de los

jóvenes aumentando la probabilidad de que un distrito fuera participativo, abre la posibilidad de que este grupo pueda estar mostrando un creciente interés por elecciones con bajos niveles de información debido a su acceso privilegiado a medios de interconexión como el internet.

Referencias

Aparicio, F. J. y Márquez, J. (2010). Tamaño del Congreso, redistribución y umbral de representación. En G. Negretto (Ed.) *Debatiendo la reforma política*, México: CIDE, pp. 83-126.

Arellano Trejo, E. (2012). *La transformación de la Cámara de Diputados*, Documento de trabajo # 134. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) LX Legislatura.

Becerra, R., Salazar P. y Woldenberg, J. (2008). *La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas*. México: Cal y arena.

Dettrey, B. y Schwindt-Bayer, L. (2009). Presidential Institutions and Voter Turnout. *Comparative Political Studies*. 42(19), pp. 1317-1338.

Gómez Tagle, S. (2009). *¿Cuántos votos necesita la democracia? La participación electoral en México 1961-2006*. México: Instituto Federal Electoral.

Gray, M. y Caul, M. (2000). Declining voter turnout in advanced industrial democracies, 1950–1997: The effects of declining group mobilization. *Comparative Political Studies*, 33(9), pp. 1091-1122.

Laakso, M. y Taagepera, R. (1979). *Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe*. *Comparative Political Studies* 12(1), pp. 3-27.

Matsusaka, J. (1995). *Explaining Voter Turnout Patterns: An Information Theory*. *Public Choice*, 84, pp. 91–117.

Meltzer, A. y Richards, S. (1981). A Rational Theory of the Size of Government. *Journal of Political Economy*. 89(5), pp. 914-927.

Morales, M., Millán, H., Ávila, M., y Fernández, L. (2011). *Participación y abstencionismo electoral en México*. México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Universidad Autónoma de Querétaro: Instituto Federal Electoral.

Nohlen, D. (1994). *Sistemas electorales y partidos políticos*. México: FCE.

Norris, P. (2003). Do Institutions Matter? The Consequences of Electoral Reform for Political Participation. En A. Crigler, M. Just, y E.J. McCaffery (Eds.), *Rethinking the Vote*, Oxford: Oxford University Press, pp.133-148.

Norris, Pippa. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Rosenstone, S. y Hansen, J. (1993). *Mobilization, participation and democracy in America*. Nueva York: Macmillan.

Salazar, R. y Temkin, B. (2007). Abstencionismo, escolaridad y confianza en las instituciones. Las elecciones federales de 2003 en México. *Política y gobierno*. 14(1), pp. 5-42.

Schaffer, F. y Schedler, A. (2007). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder: Lynne Rienner.

Valdés, L. (2013). *Sistemas electorales y de partidos. Cuaderno No. 7*. En *Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática*. México: Instituto Federal Electoral.

Verba, S., Schlozman, K. y Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Massachusetts: Harvard University Press.

Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral. (2008). *Análisis comparativo de la reforma electoral constitucional y electoral 2007-2008*. Instituto Federal Electoral. México.

Atlas de Resultados Electorales Federales de 1991-2012, disponible en www.ine.mx. Recuperado el 01 jul, 2016.

Diario Oficial de la Federación, disponible en <http://www.dof.gob.mx/>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Reformas de 1996, 2007 y 2014).

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Reformas de 1996 y 2008).

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Reformas de 1996 y 2014).

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Reformas de 1996 y 2014).

Ley General de Partidos Políticos (Decretada en 2014).

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Decretada en 2014).

Tabla 1. Modelo de regresión logística. Procesos concurrentes para la elección de diputados federales (Legislaturas LX y LXII).

	Razón de momios	Error estándar (robusto)	Intervalo de confianza (95%)	
compsq	0.064	0.0387	0.019	0.209
posbas	2.729***	0.865	1.466	5.080
fem	0.856	0.189	0.554	1.322
jov	0.843	0.2069	0.521	1.364
ancia	1.062	0.2648	0.651	1.731
indig	2.382***	0.644	1.401	4.048
pisot	2.643**	1.005	1.254	5.571
pea	0.879	0.272	0.479	1.614
pc	2.431**	0.822	1.252	4.719
radio	3.735***	1.358	2.698	8.310
tv	0.545	0.144	0.324	0.916
_cons	0.750	0.409	0.257	2.189

n= 600

Wald χ^2 (11)=97.08

Prob> χ^2 = .000

R² de McKelvey y Zavoina=.311

Estimaciones exponenciales de beta.

* $p < .05$; ** $p < .005$; *** $p < .001$

Variable dependiente= Que el distrito se ubique en el tercil más alto de participación porcentual.

Los valores de referencia de cada predictor son los terciles de incidencia menor de cada evento (ej. que los ciudadanos no se encuentren en el más alto tercil de la categoría).

Tabla 2. Modelo de regresión logística. Procesos intermedios para la elección de diputados federales (Legislaturas LX y LXII).

	Razón de momios	Error estándar (robusto)	Intervalo de confianza (95%)	
compsq	4.425	2.770	1.297	15.092
posbas	0.908	0.256	0.522	1.580
fem	0.394***	0.088	0.254	0.611
jov	2.022***	0.468	1.284	3.184
ancia	2.477***	0.594	1.548	3.964
indig	0.692	0.156	0.443	1.079
pisot	1.140	0.301	0.679	1.914
pea	0.312***	0.091	0.176	0.554
pc	1.751	0.545	0.950	3.225
radio	0.826	0.219	0.491	1.389
tv	0.789	0.209	0.469	1.326
_cons	0.186	0.099	0.065	0.528

n= 600

Wald $\chi^2(11)=59.08$

Prob> $\chi^2= .000$

R² de McKelvey y Zavoina=.142

Estimaciones exponenciales de beta.

* $p<.05$; ** $p<.005$; *** $p<.001$

Variable dependiente= Que el distrito se ubique en el tercil más alto de participación porcentual.

Los valores de referencia de cada predictor son los terciles de incidencia menor de cada evento (ej. que los ciudadanos no se encuentren en el más alto tercil de la categoría).